

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiocho (28) de junio de dos mil veintidós (2022)

Respecto a la petición formulada por la parte demandante, se dice lo siguiente:

Ha de precisarse que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STL 8898 – 20217 de 7 de julio de 2021, Radicado 63.536, señaló:

“...se debe recordar que, en los casos de peticiones interpuestas ante autoridades judiciales, estas se deben diferenciar según su finalidad, dividiéndolas para estos efectos en las propiamente jurisdiccionales y las administrativas. Así, en lo atinente a las primeras, las mismas se encuentran reguladas por los Radicación n.º 63536 SCLAJPT-11 V.00 9 términos procesales previstos en la ley, de forma tal que los requerimientos que allí se formulen no están amparados por el derecho fundamental de petición. Al respecto, en sentencia CC C-951-2014, el máximo órgano de cierre de la jurisdicción constitucional adocrinó:

[...] cuando allí se alude a la posibilidad de apelar al derecho de petición para formular denuncias e interponer recursos no hace referencia a aquellas denuncias que dan inicio a una actuación penal, ni la interposición de recursos incluye aquellos que en ejercicio del derecho a la defensa puedan instaurarse en el curso de las actuaciones judiciales, cuyo trámite se regirá por las reglas que particularmente fijen los procedimientos judiciales, toda vez que debe entenderse que el artículo 13 que el legislador estatutario incorpora a la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplica frente a las actuaciones administrativas, no así a los procesos judiciales.

Frente a las segundas, al tratarse de asuntos meramente administrativos, se ha indicado que se enmarcan dentro de las prerrogativas del derecho de petición y están sujetas a sus plazos. En este sentido, mediante fallo CC T425 de 2011, la Corte Constitucional dispuso:

[...] como quiera que el núcleo esencial del derecho de petición y, por lo mismo, su satisfacción, radica en que la solicitud sea resuelta de manera pronta y oportuna, cuando se solicite un comportamiento específico de la autoridad correspondiente, el derecho solo queda satisfecho cuando tal actuación sea efectivamente materializada. Un ejemplo de lo anterior fue expuesto en la referida sentencia T-1124 de 2005, donde se indicó, en relación con la expedición de copias de actuaciones judiciales, que “(...) no resulta razonable sostener que la solicitud de expedición de copias auténticas resulta satisfecha simplemente con el auto del funcionario judicial, por cuanto el derecho que otorga el ordenamiento legal no sólo se orienta a la mera solicitud de los documentos sino a obtener su “expedición y entrega”. Así, solamente hasta que se haya entregado la copia solicitada se protege de forma material este derecho, que encuentra su garantía constitucional en el debido proceso.

De otro lado, esta Sala en providencias CSJ STL4477- 2014, STL15817-2017, STL15639-2017 y de 15 de abr de 2020, rad. 88643, ha reiterado la obligación que tienen los jueces de dar respuesta dentro de los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015, cuando lo solicitado sea la expedición de copias:

[...] la petición de desarchivar un expediente con la consecuente solicitud de copias informales, tal como ocurre en el sub examine, «tiene naturaleza administrativa que recae en cabeza de la autoridad que lo tramitó y, por ende, no está sometida a las reglas procedimentales propias de la causa», así lo reseñó esta Sala de la Corte en providencia CSJ STL 3314-2017, en la cual se trajo a colación la sentencia CSJ STC, 15 abr. 2013, Rad. 00040-01. (sentencia CSJ STL15639-2017)

De ahí que resulta importante indicar que en el sub litem, los requerimientos elevados por la parte actora de fechas 23 de marzo y 9 de junio de 2021, tienen como finalidad el impulso procesal, asunto que evidencia la naturaleza jurisdiccional de la solicitud elevada por la parte actora, y que, por ende, no se rige bajo las reglas del derecho de petición, tal y como pretende la accionante, y por ende, a autoridad judicial cuestionada no está en la obligación de dar respuesta a tales solicitudes. Por otra parte, tampoco existe una mora judicial injustificada por parte del juzgado accionado, en tanto que la mora judicial debe tener su origen en una conducta irregular, arbitraria y notoriamente injustificada, condiciones que esta Sala no encuentra acreditadas.

En ese orden de ideas, es importante señalar que el juzgador constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, sin que le sea posible invadir el ámbito que la propia Constitución Política le ha reservado a estos, so

pena de violar los principios de autonomía e independencia judicial contemplados en los artículos 228 y 230 de la Carta Política.

En efecto, esta Sala de la Corte ha manifestado de manera reiterada y pacífica, entre otras, en sentencias CSJ STL, 1º nov. 2011, rad. 35101, CSJ STL3091-2016, CSJ STL6777-2016, CSJ STL12096-2017, STL5824-2018 y, recientemente, en CSJ STL1321-2019, que es improcedente que el juez de tutela disponga, con desconocimiento de la organización interna de cada despacho, que se profiera decisión dentro de un determinado proceso judicial, sin advertir previamente la cantidad de expedientes en ese estado o el orden de entrada del mismo para tal fin, pues el llamado a emitir la decisión no puede alterar el orden cronológico en que han ingresado los expedientes al despacho para los respectivos pronunciamientos o las fechas asignadas para proferir los mismos.

Lo anterior, por estar expresamente prohibida esa conducta por el artículo 63 A de la Ley 270 de 1993, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, en concordancia con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, consagrada también como falta disciplinaria susceptible de sanciones.

Adicionalmente, se debe señalar que acceder a la solicitud de amparo generaría la vulneración del derecho a la igualdad de otras personas que, con anterioridad a la accionante y, por tanto, con un turno antepuesto, se encuentran en la misma condición de la gestora y a la espera de la emisión de su decisión...”.

Ahora, este proceso fue repartido a este despacho el 24 de enero de 2017, mediante auto de 13 de diciembre de 2018 se admitió el recurso de apelación y a la fecha se encuentra pendiente de resolver. Asimismo, por autos de 14 de abril de 2021 y de 9 de junio de la anualidad que avanza, el suscrito resolvió las solicitudes de impulso procesal y de información de turnos, respectivamente, formuladas por el apoderado del actor.

Se pone de presente además, que teniendo en cuenta la fecha de radicación del proceso, el reporte de estadística del trimestre enero – marzo de 2022, que registra un total de 640 procesos vigentes a cargo del Despacho, la programación de agenda y que a la fecha se están resolviendo los ingresados en 2016 que se recibieron de la Sala de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín cuando expiró el periodo para el cual ésta fue creada, lo cual sucedió desde diciembre de 2015, empero los

05 001 31 05 018 2013 00300 01
DTE: GLADYS ROCIO PULGARIN SIERRA y OTRO
DDO: MEDIOS GRAFICOS IMPRESOS S.A.S. y OTRO

trámites a que se referían correspondían a procesos radicados en el año 2014 o incluso anteriores, así como también los ingresados en los años 2016, 2017 y 2018 por unidades temáticas, no es posible en este instante estipular una fecha aproximada para proferir decisión de segunda instancia, lo para nada significa que no se esté trabajando para su decisión.

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

Magistrado

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 112 de junio 29 de 2022

consultable aquí:
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e5dab004cc8e53951e9900beff36827ddb561a390104aeafcaadf78b5b0bbc94**

Documento generado en 28/06/2022 03:17:28 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>